

CONFLICTO Y POST-CONFLICTO DESDE LA PERIFERIA TERRITORIAL COLOMBIANAⁱ. *CONFLICT AND POST-CONFLICT FROM THE TERRITORIAL PERIPHERY OF COLOMBIA.*

Jerónimo Ríos Sierraⁱⁱ

Resumen

El objeto de las siguientes líneas pasa por hacer valer, como hipótesis de investigación, la *periferialización* experimentada por el conflicto armado colombiano en los últimos años. Como consecuencia del alcance experimentado por la Política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, pero también por el particular impacto del paramilitarismo, se ha llevado a cabo una tendencia centrífuga de la seguridad pública pero también de la violencia derivada del conflicto armado.

Esta *periferialización* plantea un importante reto al Estado colombiano, sobre todo, porque una hipotética desactivación del conflicto con las FARC, y posiblemente con el ELN, dentro de los actuales diálogos de La Habana, solo será posible si se aboga por la superación de unos condicionantes estructurales de la violencia que, hoy por hoy, continúan irresueltos.

De no darse esta circunstancia, muy posiblemente el sentido de la paz en Colombia siga siendo limitado y confiera a una parte importante de su territorio una lógica en la que la presencia de los grupos armados irregulares y la traducción violenta que ello supone siga resultando una constante lejos de cualquier atisbo de superación.

Palabras clave: Colombia, conflicto armado, paz positiva, *periferialización*

Abstract

The purpose of the following lines is to analyze the *peripheralization* experienced by the Colombian armed conflict in recent years. Above all, because of the scope of the Democratic Security Policy and Plan Colombia, but also by the impact of the paramilitaries, has conducted a centrifugal tendency of public safety but also of violence due to the armed conflict.

This *peripheralization* poses a significant challenge to the Colombian State. Especially because a hypothetical end of the conflict with the FARC, and possibly with the ELN, within the current dialogues in Havana, is only possible if argues for the overcoming of some structural conditions of violence that today, still unresolved.

If there are no such circumstances, quite possibly the sense of peace in Colombia will be limited and will confer a significant part of its territory a logic in which the presence of irregular armed groups and violent translation that entails continue to be a constant away from any hint of improvement.

Keywords: Colombia, armed conflict, positive peace, *peripheralization*

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tiene como principal propósito recoger algunas de las dinámicas más relevantes que durante la última década han tenido lugar en las cartografías del conflicto interno que presenta Colombia desde 1964. Con ello, a grandes rasgos, y especialmente por la complejidad del fenómeno, se busca presentar algunos de los escenarios más relevantes de continuidad y de ruptura producidos tras la llegada al poder de Álvaro Uribe, en el año 2002. En todo caso, se trata de un punto de partida cuya continuidad, y ese es el objetivo, pasa por profundizar el trabajo de campo realizado sobre cada uno de los territorios y escenarios que, de manera general, van a ser planteados en este trabajo inicial.

A inicios de siglo XXI, Colombia presenta un escenario en el que el escalamiento de violencia del conflicto armado trae consigo una situación en la que deviene fundamental fortalecer el aspecto de la seguridad. Si bien ello ya se había iniciado con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), en el que se adoptan las primeras medidas de modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas y la firma del Plan Colombia con la Administración Clinton, la llegada al poder de Álvaro Uribe (2002-2010), sobre todo, tras el propósito truncado de la “Diplomacia para la Paz” de su predecesorⁱⁱⁱ por llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, modifica en buena parte la forma de comprender e intervenir, por parte del Estado, sobre la dinámica propia del conflicto.

Es por esto que las siguientes líneas buscan, primero, presentar la situación próxima al colapso en la que Colombia se encontraba, especialmente, entre 1998 y 2000. Tras ello, se pretende dar cuenta de los cambios que la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática (PSD) y el Plan Colombia han representado en la transformación de la correlación de fuerzas que, hasta el momento, presentaba el conflicto. A partir de entonces ésta empieza a resultar favorable para el Estado colombiano si bien, a tal efecto, no puede obviarse el factor paralelo de expansión y consolidación del paramilitarismo, especialmente desde 1997^{iv}.

En suma, estos tres factores, dan lugar a una paradójica situación, primero de fortalecimiento del Estado e incremento de la seguridad, lo cual se traduce en importantes victorias que merman el pie de fuerza y el control territorial de los diferentes grupos guerrilleros. Y segundo, de consolidación de un tercer actor, el paramilitarismo, que en paralelo, produce su particular “guerra sucia” contra la guerrilla traducida, igualmente, en terror y en violencia y que, al margen de su aparente desmovilización entre 2005 y 2006, continúa siendo parte fundamental e indisociable del conflicto a través de su redefinición en lo que se conoce como Bandas Criminales, Bacrim. Unas bandas que operan como un actor clave en la comprensión de las actuales cartografías y dinámicas propias que presenta en conflicto armado colombiano.

Con todo, lo que se pretende en este escrito no es sino explicar las transformaciones que ha experimentado esta confrontación en Colombia, entendiendo cómo se entienden los avances en seguridad y control territorial del Estado, y dónde se encuentran en la actualidad los mayores escenarios de violencia y presencia de los grupos armados irregulares. Una ubicación que, según el caso, será clave para entender las posibilidades reales sobre las que transita una eventual desmovilización de las FARC, y muy posiblemente del Ejército de Liberación Nacional - ELN, en el caso de que finalice exitosamente el actual proceso de diálogo que tiene lugar en La Habana.

2. COLOMBIA, AL BORDE DEL COLAPSO

El año 2002 representa un punto de inflexión en el devenir del conflicto colombiano. En ese año, tras 1.139 días de “paz armada”, el intento por desarrollar un diálogo con el que aspirar verdaderamente al fin del conflicto con las FARC finaliza, y el escepticismo sobre cualquier atisbo de paz se presenta más lejos que nunca para la sociedad colombiana.

El conocido como proceso del Caguán, que comienza Andrés Pastrana en 1999, queda prácticamente desdibujado desde sus comienzos. Formalmente, porque su diseño contraviene cualquier lógica de simplificar y facilitar la discusión y los posibles intercambios cooperativos sobre los que abordar un proceso de paz, al erigirse sobre una agenda dividida en 12 temas y 48 subtemas que dificultaba sobremanera la negociación.

Materialmente, porque mientras se lleva a cabo la discusión, en el trasfondo las FARC se sirven de 42.000km² de una “zona de despeje”, habilitada en los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en Meta así como San Vicente del Caguán en Caquetá, para rearmarse y fortalecerse, tanto en efectivos como en la obtención de recursos económicos y militares.

Asimismo, los grupos insurgentes, especialmente FARC y ELN en ese momento siguen protagonizando atentados, secuestros y extorsiones; el paramilitarismo paulatinamente se va consolidando a base de terror y violencia, y la fuerza pública inicia una fase de modernización y fortalecimiento cuya máxima expresión tiene lugar con el cese de las negociaciones y la llegada de Álvaro Uribe al poder.

Para entender cómo procesa en aquel entonces la guerra en medio de los diálogos de paz, basta con observar las cifras del conflicto el último mes antes de que se ponga fin al mismo. Como señala Fernández de Soto (2004, p.177), solo en el mes de febrero de 2002, las FARC “habían perpetrado 117 atentados terroristas, entre los cuales 4 carros-bomba, 5 ataques a instalaciones militares, la voladura de 33 torres de energía, de 2 tramos de un oleoducto y de 3 puentes y el homicidio de 20 civiles”.

No obstante, para comprender la difícil tesitura en la que se encuentra Colombia, resultan sumamente ilustrativas las cifras que por aquel entonces presentaba el conflicto armado. Los grupos irregulares armados, tanto la guerrilla como los paramilitares evidencian en ese momento el mayor grueso de efectivos de su historia.

Las FARC quedan, en torno al año 2002, conformadas por más de 70 frentes y 18.000 efectivos (Valencia, 2002), a la vez que el ELN llega a los 4.500 guerrilleros (Espejo y Garzón, 2005), siendo más de 30.000 los combatientes que forman parte de las AUC.

El control territorial del Estado queda por completo desdibujado, de manera que los 32 departamentos y dos terceras partes de los municipios del país se encuentran afectados directamente por la presencia de uno o más grupos armados irregulares.

Como recoge un pormenorizado trabajo de Cinep (2012), solo en 2002 se produjeron 1.958 casos de violencia armada (826 de las FARC, 522 de las AUC, 404 de la fuerza pública y 206 del ELN), a lo que cabría añadir 699 víctimas de miembros de la policía y el ejército, 917 ataques a las infraestructuras del Estado (Mindefensa, 2011), más de 400.000 desplazados (Codhes, 2011) y más de 2.000 hechos infractores al Derecho Internacional Humanitario.

Bajo estas circunstancias, la “precariedad del Estado” (Pécaut, 1991) parece mayor que nunca, hasta el punto que la Administración Clinton llega a tener el convencimiento de que una posible derrota militar del gobierno colombiano a manos de las FARC resulta posible, sobre todo, si se mantiene la situación de asfixia económica de la guerrilla sobre Bogotá y Medellín, y habida cuenta de que una quinta parte de los municipios del país carecían de un solo policía o miembro del ejército en su localidad (Pécaut, 2000).

Con un monopolio legítimo de la violencia relativo, sin un control territorial sólido y con una debilidad relevante en algunos aspectos institucionales y de seguridad, Colombia se encuentra, según muchos autores, al borde del colapso. Esta tesis se convierte, no obstante, en objeto de un prolífico número de estudios e investigaciones que gravitan en todo momento en torno a la noción tangible de “Estado fallido”, como recogen en aquel momento indicadores como los de *Foreign Policy*, *The Fund for Peace*, el índice Carleton o el índice Brookings^v.

Por ejemplo, a tal efecto, Rotberg (2004) se refiere a Colombia como un “Estado en vías de colapso”, principalmente, por el resquebrajamiento sufrido por la arquitectura institucional del Estado de Derecho y la ausencia de garantías mínimas que provean el derecho a la justicia o a la seguridad.

Pizarro y Bejarano (2002) hablan de “Estado débil”, en unos términos muy similares a los de Wallesteen (2000) o Esty et al. (1998) cuando hacen mención a Colombia como “Estado fallido”, a tenor de lo incontrolable de la violencia por parte del poder público, especialmente en lo que tiene que ver con la dimensión humanitaria y su traducción en violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

De igual modo, Koonings y Krujit (2004) hacen referencia a un “fracaso parcial del Estado”, dada la falta de mecanismos garantes de orden legal, civil y militar en lo que respecta a más del 60% del territorio. Asimismo, Rice (2002), Duncan (2006) o Briscoe (2007) plantean este tipo de consideraciones sobre cómo interpretar al Estado colombiano en relación con la difícil tesis que plantea el conflicto armado si bien, enfatizando en cómo el cariz del narcotráfico deviene nuclear para interpretar verdaderamente el alcance y sentido de la debilidad institucional del Estado en Colombia.

Todas estas múltiples denominaciones y nomenclaturas para el caso colombiano, pese a los matices, son compartidas en el fondo, habida cuenta que Colombia, a inicios del siglo XXI, debe interpretarse como un Estado superado por una violencia directa y estructural (Galtung, 1969; 1996) que conduce inexorablemente a la parálisis institucional del mismo. Una parálisis a la que, en adición a las cifras planteadas al inicio, hay que destacar una imperante dificultad en cuanto a gobernabilidad, una fuerte concentración de la tierra, una cuestión agraria irresoluta, así como una alta precariedad en el funcionamiento normal del democrático. Además, el panorama social deviene sumamente preocupante, con más de la mitad de la población por debajo del umbral de pobreza y con un índice de inequidad social y de concentración de la riqueza creciente, con una de las cifras más elevadas de todo el continente.

Solo así es como se entiende el contexto de “violencia prosaica” que destaca Pécaut, (1997) para referirse a un conflicto colombiano en el que guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, milicias urbanas y bandas delincuenciales se intersectan en la ya de por sí intrincada dimensión multifacética que supone la violencia. Una violencia, en definitiva, donde las dualidades organización/desorganización o legalidad/ilegalidad se difuminan a

través de otras prácticas relacionadas, como corrupción y clientelismo, y que en suma, constituyen un conjunto de riegos y amenazas que, cuando menos, terminan por desvirtuar el sentido de Estado de Derecho, social, democrático, recogido en el primer artículo de la Constitución colombiana.

3. LA LLEGADA DE ÁLVARO URIBE AL PODER Y LAS TRANSFORMACIONES EN LA FORMA DE COMPRENDER EL CONFLICTO COLOMBIANO

El año 2002 representa un punto de inflexión en Colombia, tanto por la llegada de un completo *outsider* como es Álvaro Uribe, que rompe con el bipartidismo imperante hasta entonces (Partido Liberal/Partido Conservador), como por, derivado de ello, las fuertes transformaciones que se van a producir en la forma de atender y entender el conflicto por parte del Estado y el poder público colombiano.

Tras el mencionado propósito truncado de la “Diplomacia por la paz” por llegar a un acuerdo con las FARC, la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia se produce a través de una ruptura con las tendencias de carácter negociador dominantes hasta entonces.

Se descarta cualquier política de aproximación con los grupos guerrilleros, al promoverse una política de confrontación, legitimada por una sociedad como la colombiana, escéptica y desafecta tras los reiterados fracasos de explorar una solución negociada al conflicto, y que por primera vez apuesta por una forma más reaccionaria en la forma de superar el mismo.

Conviene señalar que hasta entonces, la “guerra contra los narcotraficantes” promovida por Virgilio Barco (1986-1990) con motivo del asesinato del candidato presidencial liberal, Luis Carlos Galán, así como la “guerra integral” de César Gaviria (1990-1994), frustradas las negociaciones con las FARC y el ELN en el marco de una Asamblea Constituyente como la de 1991, se trataron de las dos experiencias más reaccionarias, de confrontación directa, llevadas a cabo en Colombia contra los grupos insurgentes.

Ambas iniciativas, que fracasaron en su propósito, a diferencia del caso de la elección popular de Uribe, además, tuvieron lugar tras la ruptura de políticas negociadoras e intentos por encontrar fórmulas de consenso para desactivar el conflicto armado colombiano.

Paralelamente, junto a esta dinámica endógena de cambio dentro del sistema político colombiano, se produce una transformación en el orden geopolítico mundial, como consecuencia de los atentados del 11-S y la llegada a la presidencia estadounidense del republicano George W. Bush, máximo exponente del “realismo preventivo” y de la seguridad como elemento nuclear del código geopolítico de Washington y su proyección exterior.

Sobre estas circunstancias, la seguridad como valor y como derecho va a resultar la depositaria de toda la construcción del andamiaje institucional y de (re)construcción del Estado en Colombia, tanto desde la lógica uribista de “primero seguridad, después libertad”, como desde el apoyo proveniente de Estados Unidos y la comprensión neo-conservadora de la seguridad.

Todo este elenco de circunstancias se imbrica sobre un punto común, que es el de concebir la superación del conflicto armado colombiano, como se antedijo, en los términos que Galtung (1964) y otros más tarde denominan como “paz negativa”, esto es,

comprendiendo la paz como ausencia de guerra y no aspirando a superar las condiciones de violencia estructural –inequidad, marginalidad, pobreza, debilidad institucional de la dimensión social, democrática y de derecho del Estado- que dan sentido a la “paz positiva”.

Tal conjunción, *ad intra*, fruto de las transformaciones y cambios que acontecen a partir de 2002 en Colombia, y *ad extra*, a partir del nuevo orden geopolítico emergente, va a materializarse en dos iniciativas dentro del particular caso colombiano. Dos iniciativas en las que la prioridad resulta el propósito compartido por reducir la fortaleza militar de los diferentes actores irregulares en liza y disminuir su control efectivo territorial: la PSD y el Plan Colombia.

El primero se comprende como el gran componente de política pública del uribismo, articulado a través de dos programas marco, la Política de Seguridad Democrática, en sentido estricto, (2003-2006) y su evolución en lo que se conocerá como la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (2007-2010)^{vi}.

En su primera fase, la Política de Seguridad Democrática tiene como principal objetivo el asumir la seguridad como una tarea conjunta y prioritaria de todas las autoridades, lo cual se produce a través de una inversión ingente de recursos económicos, humanos y militares, bajo una consideración y una proyección beligerante con las FARC y con el ELN especialmente, y sobre un montante que asciende a los 1.835 millones de dólares.

Ello representa un esfuerzo verdaderamente sin precedentes en Colombia, a tenor de que busca, por primera vez, pensar en revertir el sentido que hasta entonces había llevado consigo el conflicto armado, tal y como se ha visto, sobre una correlación de fuerzas, especialmente hasta el año 2000, cada vez más favorable hacia los grupos armados irregulares. De esta manera, casi de manera inmediata, y sobre la base de trabajar en políticas y procesos ya iniciados bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se empiezan a obtener importantes logros en lo que a reducir la capacidad combativa de las FARC y del ELN e incrementar la capacidad de ataque de la fuerza pública.

Sin embargo, los costos humanos y militares de esta iniciativa, igualmente fueron mayúsculos, a tenor del incremento desproporcionado de combates, acciones bélicas y violencia de la guerrilla. Tanto es así, que “ante la incapacidad de diseñar una estrategia eficaz mediante el plan de guerra de la Política de Seguridad Democrática, identificado con el eufemismo de Plan Patriota, se disimuló con la adopción del nuevo nombre: Política de Consolidación de la Seguridad Democrática” (Leal, 2010)^{vii}.

Pese a los cambios de forma en cuanto a la narrativa de cómo identificar la política pública de superación del conflicto armado, y que incluso lleva al propio Álvaro Uribe a afirmar la inexistencia y la desaparición del mismo en una redefinición de la violencia hacia el terrorismo, lo cierto es que el trasfondo queda inalterable en su componente más sustancial^{viii}, además de incorporar dos importantes novedades.

La primera, claramente efectiva, pasa por desarrollar, en articulación con el apoyo estadounidense, un mayor énfasis en lo referente a inteligencia técnica y humana, asesoría del más alto nivel así como un fortalecimiento de los instrumentos de cooperación y coordinación del ejército junto con la policía nacional. Asimismo, se identifica la necesidad de mejorar la distribución de recursos y se priorizan la desertión y la captura como formas de debilitar a los grupos irregulares armados frente a la búsqueda, casi

obstinada, hasta entonces, de causar bajas en el “enemigo”. También se refuerzan los instrumentos de recompensa y participación de la sociedad civil.

La segunda diferencia estriba en el monto de recursos que durante esta segunda etapa del mandato de Álvaro Uribe se utiliza para fortalecer la seguridad del país, y que según las cifras del Informe al Congreso de la República (2010) asciende a 5.770 millones de dólares.

En otras palabras, se produce un crecimiento paulatino y sustancial del porcentaje del PIB destinado a seguridad y defensa, y que durante estos ocho años supera el 5%, lo que representa más del doble de lo que destinan los presupuestos de los países de la OCDE y un casi un punto porcentual más que Estados Unidos.

De esta manera, Colombia se va a convertir, transcurrido este tiempo, en el cuarto país del continente que más va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Además, se erige como el país de América Latina con mayor cobertura de la fuerza pública por número de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, únicamente superado por Bolivia (Mindefensa, 2011b)^{ix}.

En esta misma tendencia, la Policía Nacional colombiana, entre 2002 y 2010, pasa de los 110.000 miembros a los 160.000, y el ejército de 203.000 a 270.000 efectivos, de manera tal que, en términos agregados, el pie de fuerza pública en Colombia experimenta un incremento del 40% al cual, cualitativamente, habrá que añadir otros tantos avances notables en lo que tiene que ver con modernización, organización, coordinación, distribución y disposición de recursos (Mindefensa, 2011).

A tal circunstancia de transformación, además, cabe adicionar el impacto que supuso la puesta en marcha del Plan Colombia^x, transformado por Uribe y Bush en buena parte de parte de los componentes de carácter más social, diseñados por Andrés Pastrana y Bill Clinton, y que continuado, en menor medida, por la Administración Obama, va a representar para Colombia a lo largo de la década una apoyo superior a los 8.000 millones de dólares, siempre, sobre una orientación de carácter eminentemente militar y reactiva.

Todo esto convierte a Colombia en el tercer destinatario de la cooperación estadounidense en estos términos, tras Israel y Egipto, y se traduce en el desarrollo de operativos para la defensa de la infraestructura nacional, como es el caso del oleoducto Caño Limón-Coveñas; en la llegada de más de 800 asesores de alto nivel; o en la puesta en marcha de un plan de políticas antidrogas, con fuerte impacto sobre los escenarios productores del sur del país y con el apoyo de varios *Black Hawks* estadounidenses. Igualmente, se facilita la instrucción de brigadas militares y la adquisición de un ingente equipamiento militar en forma de *drones*, bombas inteligentes, lanchas rápidas o aviones ligeros.

4. DE LA FASE DE INICIATIVA MILITAR AL REPLIEGUE TERRITORIAL

Hacia el año 2000, la distribución de las acciones armadas de las FARC y del ELN, y también del paramilitarismo, van a responder a una lógica centrípeta, especialmente por el propósito de la guerrilla de asfixiar económicamente los centros económicos del país, especialmente Bogotá y Medellín, pero también otros, como Cali o Barranquilla.

Es por ello que las mayores dosis de violencia derivadas del conflicto se concentran en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de

Santander, Santander y Tolima. Tal cartografía, paralelamente, se acompaña por altos incrementos en la intensidad del conflicto en Casanare, Chocó, La Guajira, Magdalena y Putumayo (Echandía, 2006) que, en su mayor parte, son escenarios de retaguardia de gran valor estratégico para el sostenimiento del conflicto y la obtención de fuentes económicas de poder.

Durante la negociación del Caguán (1999-2002), se va a consolidar la fase de expansión guerrillera, sobre todo de las FARC, fruto de una correlación de fuerzas sin precedentes, favorable a la guerrilla, y que permite encontrar algunos elementos definitorios de lo que Pizarro (2011) y Pécaut (2008) denominan como “guerra de posiciones”. Es decir, tras una consolidación militar y territorial de la guerrilla, se lleva a cabo una ofensiva técnica que tiene como principal finalidad aniquilar parcialmente o dispersar al ejército colombiano, combinando la insurrección urbana con la guerra, y siempre con miras, en último término, a la toma del poder público.

Dicho esto, las FARC van a disponer de una consolidación territorial más que considerable a través de cerca de 70 frentes^{xi}. En el centro y suroriente del país, con el Bloque Oriental (Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Vaupés); y con los Bloques Central y Sur (Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle). Igualmente, sobre las regiones de Antioquia y Chocó va a operar a través del Bloque Noroccidental; por medio del Bloque Magdalena Medio en la región del Magdalena Medio, y finalmente, en el nororiente del país (Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Santander y Vichada) a través de los Bloques Norte, Magdalena Medio y Oriental.

En el caso del ELN, en 2002 cuenta con 33 frentes, cada uno de unos 130 combatientes aproximadamente (Vélez, 2011), si bien con una ubicación geográfica claramente diferente a la de las FARC, al concentrarse en el norte y centro del país (Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Sucre, y los tres departamentos del eje cafetero, Risaralda, Quindío y Caldas) y en mucha menor medida en el suroccidente colombiano, en Cauca, Nariño y Valle.

Como puede observarse, dada esta presencia de la guerrilla sobre gran parte del país, la PSD y el Plan Colombia van a tener como prioridades, por un lado, realizar combates directos en el grueso de departamentos que conforman la región central del país; y por otro, afectar algunos de los escenarios estratégicos que son caldo de cultivo de la financiación guerrillera. Es como se entiende el fortalecimiento de los municipios sobre los que transcurre el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en Arauca, y clave para el ELN, o la actuación de fumigación aérea sobre los campos de cultivo de coca en Meta, Caquetá o Putumayo, en el sur del país, fundamentales en la economía de las FARC. En ambos casos, el Plan Colombia va a devenir como herramienta de acción de gran importancia.

Dentro de esta lógica centrífuga de ataque a la insurgencia y búsqueda de recuperar el control territorial, se parte del centro para extenderse paulatinamente hacia la periferia, circunscribiendo operaciones tan significativas como lo fue “Libertad I”, en la que participaron más de 15.000 efectivos dentro de un campo de acción de más de 70.000 km², y que abarca el oriente de Tolima, todo el departamento de Cundinamarca, el norte de Meta y el suroriente de Boyacá.

Esta operación, sin parangón, debe entenderse como el primer punto de ruptura con la cartografía envolvente de las FARC y el ELN sobre el centro. Las victorias y las conquistas territoriales derivadas de la misma van a ser de gran valor estratégico para

consolidar el control territorial creciente y sin retorno en beneficio del Estado, además, de traer consigo la muerte de importantes líderes, especialmente de las FARC, como son los guerrilleros “Manguera”, “El Viejo” o “Marco Aurelio Buendía” (Pizarro, 2011).

En este mismo escenario se pueden destacar las importantes operaciones que tienen lugar por medio del uso de diferentes unidades conjuntas, como es el caso de las Fuerzas de Tarea Omega, dirigidas a mermar los Bloques Sur y Oriental en la retaguardia estratégica de las FARC, en la región suroriente del país, sobre los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.

Algo similar va a suceder con el ELN, al cual se le va a golpear con fuerza, especialmente durante los cuatro primeros años de mandato de Álvaro Uribe, en zonas de tradicional apego y presencia guerrillera “elena”. Es por ello que entre 2003 y 2006 se reducen las acciones unilaterales de esta guerrilla a la vez que se incrementan notablemente los combates con el ejército. Tanto es así que Cerac (2010) registra en este lapso de tiempo, 691 combates frente a 456 acciones unilaterales con especial focalización en Arauca, Norte de Santander y el oriente y el nororiente antioqueño^{xii}.

Paralelamente a esta mayor y mejor fuerza de combate de la policía y el ejército colombiano, acontecen importantes golpes estratégicos sobre los altos mandos de las FARC y del ELN. En primer lugar, como las tres acciones más significativas al respecto deben mencionarse la “Operación Fénix” (2008), la “Operación Sodoma” (2010) y la “Operación Odiseo” (2011) – ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). Las tres supusieron la muerte de tres de los miembros históricos más relevantes de la guerrilla y, todos ello, componentes de su Secretariado: “Raúl Reyes”, “Mono Jojoy” y “Alfonso Cano”.

Del mismo modo, no pueden obviarse otras bajas, también significativas, como la captura de “Simón Trinidad” en Quito, en 2004, por parte de los servicios secretos colombianos; o las muertes, en 2007, del “Negro Acacio”, miembro del Secretariado y clave en la economía de la droga en Guaviare y Vaupés; de Martín Caballero, jefe del Frente 37 de Sur de Bolívar; y, en 2008, de “Iván Ríos”, jefe del Bloque Central de las FARC.

Igual sucedió con el ELN, notablemente diezmado, y que en el transcurso de esta década experimenta una reducción de su fuerza de combate del 50%, perdiendo, entre otros, a los tres líderes, entre 2009 y 2010, del importante Frente Bolcheviques de Líbano, “Mauricio”, “Duván” y “Laín”, lo cual conduciría posteriormente a la desarticulación del grupo más activo de este grupo sobre el departamento de Tolima.

Como puede darse cuenta, la PSD y el Plan Colombia van a suponer un instrumento de gran valor en las rupturas sobre la cartografía envolvente del conflicto y el vasto control territorial sobre escenarios anteriormente controlados por la guerrilla. Empero, hasta el momento, no se ha hecho referencia a una tercera variable, de gran trascendencia y que debe ser incorporada para la plena comprensión de esta tendencia de repliegue insurgente, como es la consolidación de la estructura paramilitar.

En un Estado como el colombiano, con un fuerte déficit de seguridad, el paramilitarismo había emergido con fuerza, décadas atrás, como un instrumento con el que combatir la guerrilla, primero, en beneficio de ganaderos, terratenientes y empresarios presionados por la guerrilla a modo de extorsión (“vacunas”) y secuestro; y después, como una forma óptima desde la que suplantar a la misma para acceder a sus fuentes de poder económico más relevantes, especialmente, el narcotráfico.

En 1997 tiene lugar la articulación de las AUC, ni mucho menos, nada comparable a la estructura jerárquica y organizada de la guerrilla, y que es la máxima expresión visible de lo que es el poder paramilitar.

Las AUC, legitimadas como una forma de combatir la guerrilla en escenarios donde la presencia del Estado había adolecido de importantes carencias durante décadas, acaba favoreciendo la consolidación de un tercer actor que quiere ser parte del “negocio” que representa el conflicto armado colombiano.

Escenarios del norte del país, con tradicional presencia guerrillera como son la región oriental antioqueña de Urabá, las regiones del Magdalena Medio y los Montes de María así como los departamentos de Arauca, Chocó, Norte de Santander y Santander; y los departamentos del sur como Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño y Putumayo, corredores estratégicos de la retaguardia insurgente, a partir de 1998, se van a erigir como enclaves sobre los que el paramilitarismo se va a expandir, en muchos casos, con relativa facilidad y rapidez; y en otros, dando lugar a una nueva vuelta de tuerca en la violencia y la confrontación armada que se dirige, especialmente, hacia la población civil.

No casualmente, todos los emplazamientos sobre los que el paramilitarismo va a consolidarse militar y territorialmente con especial virulencia, principalmente entre 1998 y 2004, son, o lugares de cultivo de coca, o corredores estratégicos para dar salida a los mismos y servir de fuentes de poder económico para la guerrilla.

El paramilitarismo, por tanto, va a coadyuvar la tendencia de repliegue de FARC y de ELN, lo que va a permitir, después, la puesta en marcha de políticas de consolidación territorial por parte de la fuerza pública colombiana, dentro de una connivencia de intereses que va a terminar por repercutir negativamente al gobierno de Álvaro Uribe. Ello, habida cuenta de que los excesos en la lucha contra la guerrilla terminaron en muchas ocasiones incluyendo acciones como, operativos conjuntos del ejército colombiano con el paramilitarismo; la integración de la población civil en muchas de las acciones de contrainsurgencia destinadas a debilitar los apoyos de la guerrilla y, en último término la emergencia del escándalo conocido como la “parapolítica”^{xiii}

Las AUC van a llevar a cabo su acción destinada al repliegue guerrillero, en la mayoría de las ocasiones, con salvedades como la del Bloque “Héroes de Montes de María”, no por medio de confrontaciones directas con las FARC o el ELN, sino a través de infundir el terror en la población civil y en las comunidades de apoyo local en disposición de la guerrilla, lo cual termina convirtiéndose en una “guerra contra la sociedad” (Pécaut, 2001). Es por ello que, como será constante a lo largo de la década, incluso desmovilizadas las AUC, el mayor número de masacres, causas de desplazamiento forzado, despojos de tierra, etc. van a ser responsabilidad de estos grupos paramilitares.

Así, la variable paramilitar debe entenderse como fundamental y por ello no puede perderse de vista en la comprensión de los hechos que invitan a entender el repliegue de las FARC y el ELN y la transformación cartográfica del conflicto. Por ejemplo, el paramilitarismo va a ser la razón del repliegue guerrillero del ELN en Barrancabermeja, en el sur de Bolívar, en la región del Catatumbo o en La Gabarra además de ser la razón de la desaparición del histórico bloque del oriente antioqueño “Carlos Alirio Buitrago”. Para el caso de las FARC, la incursión paramilitar va a ser más que relevante, por ejemplo, en el Magdalena Medio o en el oriente antioqueño, hasta el punto que las FARC son relegadas, incluso, también, de algunos de sus tradicionales bastiones de control territorial

como la región bananera de Urabá, o de ciertos escenarios tradicionales en Guaviare o Meta.

5. LAS CONTINUIDADES DEL CONFLICTO ARMADO Y LA TENDENCIA CENTRÍFUGA DE SU CARTOGRAFÍA

Sobre la base de lo descrito, puede afirmarse que la tendencia en los últimos años experimentada por la geografía del conflicto armado en Colombia ha respondido claramente a una tendencia centrífuga, coherente con un proceso de marcada *periferialización* donde, pese a existir reducciones en el volumen de violencia total fruto del conflicto, lejos de desaparecer, ésta se reubica y transforma las interacciones tanto de los actores entre sí como de estos con el territorio.

Ello, de acuerdo con las particularidades que presentan los departamentos fronterizos, primero por una geografía mayormente selvática o montañosa, y después por otros factores tales como una fuerte debilidad institucional del Estado –que presenta, en muchas ocasiones, una correlación de fuerzas desfavorable frente a los actores irregulares armados, un importante valor estratégico como corredor desde el que dar salida a los canales de droga y tráfico ilícito hacia Ecuador, Venezuela y Panamá, y por concentrarse importantes fuentes de poder económico tales como yacimientos auríferos, esmeralderos o energéticos, además de los cultivos ilícitos de cocaína y, en menor medida, de amapola. Es así, que se comprende cómo de los doce departamentos fronterizos del país – excluyendo a San Andrés, ocho son de los que concentran mayores niveles de violencia en el país junto con la región del Magdalena Medio y los Montes de María y el departamento de Antioquia, que tradicionalmente son la evidencia de una ingente continuidad en lo que a niveles de violencia se refiere respecto de estos escenarios.

Precisamente, es en la región del Magdalena Medio donde la incursión del paramilitarismo, desde finales de los noventa, se traduce rápidamente en una posición de hegemonía respecto del resto de actores del conflicto, dada la relativa fuerza del Bloque Central Bolívar. Incluso, desmovilizado éste en 2005, la posición predominante del paramilitarismo se va a mantener gracias a que diferentes Bacrim se convierten en herederas directas de la vieja estructura de las AUC, y sobre lo cual se van a producir importantes connivencias y alianzas con el poder político local, como acontece en el sur de César a través del partido Convergencia Ciudadana, además de una injerencia directa en los comicios locales y departamentales.

Así sucede en La Gloria, donde la mayor parte de los candidatos locales en 2003 tienen que abandonar el municipio por amenazas derivadas de los grupos paramilitares. En Aguachica, también en el sur de Cesar, será asesinado, primero en el año 2000, terminado su mandato como alcalde, Luis Fernando Rincón, y después, en 2007, el candidato liberal Yaver Cortés. Por último, en otro municipio de la región como es San Alberto tendrá lugar, en el año 2000, el asesinato de la candidata a la alcaldía Aida Cecilia Lasso.

Esta violencia en la zona es fruto de su alto valor por servir de escenario comunicante con dos enclaves nucleares en los círculos del tráfico de drogas como son el sur de Bolívar y la región del Catatumbo y que explican la presencia además de grupos paramilitares, del Frente 24 de las FARC y los Frentes “José Solano Sepúlveda” y “Héroes de Santa Rosa” del ELN.

A 260 kilómetros al noroeste del sur de César se encuentra otra región de gran tradición violenta como son los “Montes de María”, con presencia de los Frentes 35 y 37 de las

FARC, el Frente “Jaime Batemán” del ELN, y primero, del Bloque de las AUC “Héroes de Montes de María”, y después con la ubicación ingente de Bacrim como “Los Paisas”, “Los Rastrojos” o “Los Urabeños”. Todos ellos se disputan el control territorial de otra zona con gran valor estratégico, con conexión directa con el Golfo del Morrosquillo en el Caribe, el cual se trata de una salida idónea para la droga que se dirige con camino hacia Europa y Centroamérica.

Todo ello explicaría de qué manera, en esta región, pese a todos los cambios cartográficos del conflicto, persiste un control territorial predominante de los grupos irregulares, traducido en el abandono de más de 80.000 hectáreas, el registro de una de las mayores tasas de desplazamiento forzado de todo el país^{xiv}, y el hecho de tratarse una de las zonas más violentas del país (De los Ríos, 2011).

Ya en el nororiente del país, dos enclaves merecen ser destacados. Por un lado, Arauca, y norte de Boyacá, que cobraron mayor relevancia tras el descubrimiento de petróleo en 1983, que inspira la construcción de un oleoducto hasta Coveñas (Sucre) y que va a ser un elemento fundamental para financiar la acción armada del ELN en esta región nororiental. Una región que en los años de la PSD es territorio de disputa entre la Brigada 5 del ejército colombiano, nuclear en la puesta en marcha de la “Operación Dignidad”, el Bloque paramilitar “Vencedores de Arauca”, los Frentes 10 y 45 de las FARC y el importante Frente “Domingo Laín” del ELN.

Lo cierto es que tras la desmovilización de las AUC, en el departamento han venido operando “Los Águilas Negras” y “Los Paisas” principalmente, y se ha venido consolidando la continuidad del departamento como un escenario de violencia y asesinatos selectivos, especialmente por la disputa de un control del narcotráfico, donde la mayor parte es dominada por el ELN, en connivencia con “Los Rastrojos”, y residualmente por las FARC. Por otro lado, y como resultado de la incursión de la “parapolítica” en el poder local, esto ha servido de razón para un incremento del número de extorsiones, secuestros y atentados a la infraestructura petrolera por parte de la guerrilla predominante, como medios de consolidación de su hegemonía y poder territorial y en tanto y en cuanto sigue siendo el actor más relevante en la zona.

Similar sucede con el segundo escenario, el Norte de Santander, que por sus condiciones geográficas, siempre ha sido un emplazamiento estratégico de gran valor en la lógica del conflicto armado. Su carácter fronterizo con Venezuela, y la frontera con el sur del Cesar y Santander lo convierten en un enclave estratégico fundamental. Aparte de sus condiciones como corredor del narcotráfico y región de cultivo, la zona del Catatumbo es importantísima por las posibilidades económicas que el extractivismo representa.

El Norte de Santander sigue siendo una zona de especial concentración de violencia, primero, por las disputas territoriales del Bloque Catatumbo con la guerrilla. Después, porque desmovilizadas las AUC, la continuidad ha venido del lado de “Los Águilas Negras” y “Los Rastrojos”, que se confrontan en la actualidad con los Frentes 33 y 41 de las FARC y los Frentes del ELN “Camilo Torres” y “Carlos Armado Cauca Guerrero”, especialmente, en la referida subregión del Catatumbo - que comprende los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama, San Calixto y Tibú.

Pese a todo, si bien en Arauca, se decía, se daban ciertas lógicas de apoyo entre ELN y “Los Rastrojos” contra las FARC, aquí, hoy en día, más bien sucede lo contrario. La situación de fuerte debilidad por el impacto del paramilitarismo en el departamento, ha relegado al ELN, un actor en otro tiempo protagonista en el territorio, a todo lo contrario,

esto es, a una situación de subordinación y apoyo a los frentes mayoritarios y dominantes de las FARC.

Otro enclave fundamental de la violencia del conflicto en Colombia se concentra, con especial virulencia, en el suroccidente del país. Allí, Cauca, Putumayo, pero sobre todo Nariño, son enclaves de fuerte presencia guerrillera y paramilitar.

Aunque es cierto que, tradicionalmente, este último departamento fue utilizado como retaguardia, y no como escenario de expansión como Arauca o Norte de Santander, tal consideración se ha ido transformando considerablemente por el impacto de la PSD, y la presión sobre la guerrilla para replegarse hacia el sur del país. Igual sucede con el Plan Colombia, que ha tenido un escenario de gran relevancia en Putumayo, por medio de la fuerte aspersión aérea y las acciones de erradicación de cultivos que, en suma, han coadyuvado para que en Nariño y Cauca se produzca una mayor concentración de actores irregulares y de violencia.

En Nariño coinciden los Frentes 2, 29 y 64 de las FARC que, hasta 2011, estuvieron en guerra con el ELN, cuya presencia se articula en torno a los Frentes “Héroes y Mártires de Barbacosas”, “Comuneros del Sur”, “Manuel Vásquez Castaño” y “Guerreros de Sindagua”. Asimismo, habría que añadir la presencia del Bloque Sur y el Bloque Pacífico de las AUC y que tras su desmovilización ha dado lugar a una fuerte presencia en forma de Bacrim traducida en “Los Águilas Negras”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”.

Lo cierto es que Nariño (17.231Ha), pero también en menor medida Cauca (6.066Ha) y Putumayo (9.951Ha), hacen parte de un escenario donde se concentran más del 50% de la superficie destinada al cultivo de coca (UNODC, 2012) y que es de vital importancia para la conexión con las redes de distribución que tienen lugar rumbo hacia Ecuador y Perú.

Como un último enclave de violencia creciente cabría resaltar al departamento de Chocó; el departamento más pobre y subdesarrollado del país pero donde se ubican importantes concentraciones auríferas y de platino. Si bien fue, como Nariño, un enclave de retaguardia del Frente 57 de las FARC y del Frente “Benkos Biohó” del ELN, Chocó va a ganar importancia para la guerrilla con la expansión paramilitar que sufre la región bananera de Urabá en Antioquia, por parte de los hermanos Castaño en la década de los noventa. No obstante, ello no va a ser óbice para la incursión en el departamento del Bloque “Elmer Cárdenas” en el norte, y “Héroes de Chocó” en el sur, desmovilizados ambos en 2005, y cuya continuidad ha quedado en manos de las Bacrim “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Los Águilas Negras” y “Renacer”.

Dada su importancia estratégica como corredor de droga hacia Centroamérica, y sus particularidades geográficas y geológicas, Chocó se ha convertido en uno de los departamentos de Colombia que más ha incrementado la superficie de cultivos ilícitos, especialmente de coca, en los últimos años. Si en 2006, la superficie cultivada era de 800Ha, hoy en día supera las 2.500Ha.

De igual forma, la transformación del territorio hacia una vocación extractiva de gran valor en cuanto a petróleo, metales nobles y madera ha dado lugar a una notable actividad guerrillera, especialmente de las FARC, con el referido Frente 57 y también con el Frente 34, que colaboran conjuntamente con el Frente “Resistencia Cimarrón” del ELN en oposición al crecimiento notable de presencia paramilitar.

Es por esto que Chocó se traduce hoy en día en un enclave con importantes disputas por el control estratégico y el incremento de prácticas extorsivas sobre los grupos de poder político y económico crecientes en el departamento y que explicarían un alto nivel de eventos violentos y una tendencia creciente de los mismos. Así, baste señalar que solo entre 2008 y 2010 se ha producido el desplazamiento forzado de 35.000 personas aproximadamente, de las 475.000 que habitan en el departamento.

6. CONCLUSIÓN

No cabe duda de que la PSD puesta en marcha con Álvaro Uribe y el Plan Colombia han tenido un gran impacto a la hora de comprender un repliegue territorial de las FARC y del ELN que, dadas las circunstancias, se ha traducido en una profunda “desterritorialización” (Pécaut, 1999) y una paulatina pérdida de escenarios tradicionales de control territorial.

A tal efecto, como se ha podido dar cuenta, en algunos de los escenarios más relevantes del conflicto armado, el paramilitarismo y la función de las AUC en la lucha contra la guerrilla han sido tan trascendentales en los cambios cartográficos del conflicto, como lo han sido los referidos Plan Colombia y PSD. Sobre todo, por las connivencias y la imbricación de un interés compartido por el que el paramilitarismo alcanzó escenarios de disputa y prácticas de confrontación a las que el Estado no podía llegar.

Sin embargo, y pese a la voluntad por parte del gobierno de Álvaro Uribe de favorecer un escenario de desmovilización de los comandantes en jefe de las AUC, a través de la Ley 975 de 2005^{xv} –Ley de Justicia y Paz- a la cual se acogieron buena parte de las elites paramilitares y por la cual se desmontó una estructura de más de 33.000 combatientes, el fenómeno paramilitar ni mucho menos ha desaparecido.

Ello, porque la continuidad de las condiciones estructurales de la violencia permitieron que tras la mencionada desmovilización, buena parte de los mandos medios, la logística paramilitar y los emplazamientos geográficos de mayor valor estratégico resultasen constantes dentro de la lógica de *periferialización* descrita, donde se presentan, indudablemente, condiciones más favorables a tal vicisitud.

Tanto es así, que consolidado el poder territorial paramilitar, y tras ello el poder económico del territorio, en última instancia, la aspiración del poder político, plasmado en la “parapolítica”, ha terminado siendo una dinámica transformadora de la violencia en Colombia. Una violencia que se redefine pero que, ni mucho menos, desaparece.

Si se observa la tendencia en los últimos años, tras la desmovilización de las AUC, los grupos herederos de la estructura paramilitar, no han hecho sino aumentar, sobre todo, de acuerdo a la rentabilidad que las fuentes de poder económico ofrecen, especialmente, en relación con el narcotráfico.

Indepaz (2012), que se ha venido consolidando como uno de los observatorios más confiables en el análisis del fenómeno paramilitar y su continuidad en Colombia, planteaba recientemente que si por ejemplo, en 2008 había 259 municipios, de los algo más de 1.100 que comprenden Colombia, afectados por paramilitarismo, en 2012 esa cifra supera los 400. De igual manera el número de efectivos se ha triplicado y supera los 7.000.

Aparte, y no por casualidad, Magdalena Medio y los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño o Norte de Santander son algunos de los que concentran mayor número de

afectaciones de estos grupos armados, entre los que destacan por su mayor control territorial “Los Rastrojos”, “Los Urabeños”, “Los Paisas” o “Los Águilas Negras”.

Actualmente, de los más de 400 municipios afectados por presencia paramilitar, ésta es especialmente notable en el caso de 271, de los cuales buena parte se concentran en los escenarios descritos de Antioquia, Chocó, Magdalena Medio Montes de María y Sur de Bolívar, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Córdoba y Cesar.

En el caso de las FARC, con una fuerza aproximada a los 8.000 guerrilleros, su presencia comprendería 249 municipios, de los que, aproximadamente la mitad se ubicarían, igualmente, en estos emplazamientos. Así sucede con el ELN, que con unos 2.500 efectivos, igualmente, dentro de los 65 municipios donde se registra su presencia, el 90% se concentrarían en Arauca, Montes de María y Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander.

Lo cierto es que, pese a las transformaciones de la cartografía del conflicto y la reducción del pie de fuerza y el control efectivo territorial de los grupos irregulares, en la actualidad, las cifras que presenta la violencia derivada del conflicto en Colombia resultan todavía más que significativas. Se siguen registrando por encima de las 1.000 violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, unas 800 acciones armadas dentro del contexto que presenta el conflicto armado, más de 1.000 muertes relacionadas directamente con el mismo y más de 250.000 desplazamientos anuales –siendo el país del mundo con mayor nivel de desplazamiento interno (Ríos el al. 2013).

Es por ello que el control territorial, la presencia incluso creciente de los grupos irregulares y la violencia armada son constantes presentes en los enclaves de mayor conflictividad armada en Colombia, y entre los que destacan las mencionadas regiones de Magdalena Medio, Montes de María y Sur de Bolívar y, no por casualidad, cinco de los doce departamentos fronterizos del país: Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

En todos estos casos coincide, una presencia ingente de cultivos ilícitos, donde se concentra más de la mitad de las 64.000 Ha de cultivo de coca que dispone Colombia o el cultivo de amapola, cuyo 68% se concentra en Nariño y el 30% restante en Cauca. Asimismo, coexisten otras fuentes de poder económico sumamente significativas, derivadas de la acción extractiva, pues en los departamentos referidos se concentra el 97% del carbón, el 43% de los metales preciosos y el 15% de la producción de petróleo (Federación Nacional de Departamentos, 2013).

Si a lo anterior se añade una escasa presencia del Estado, una débil institucionalidad del poder público, en muchas ocasiones una geografía difícil favorecida por la dimensión fronteriza, y un importante rezago en términos de desarrollo humano, calidad de vida y necesidades básicas insatisfechas, en suma, la conjunción de estos factores convierte a estos departamentos en un enclave óptimo para conferir continuidad del conflicto.

Es por todo que conviene ciertas cautelas cuando se habla de paz en Colombia, especialmente, de acuerdo con el proceso de diálogo abierto con las FARC que transcurre en La Habana y muy posiblemente, en un inminente plazo, con el ELN.

Acontecido un fuerte proceso de *desterritorialización* y unido a una fractura de la organización interna de las FARC y del ELN, la institucionalidad de las guerrillas, cuando menos, debe relativizarse. Desvirtuada por completo la esencia guerrillera, producto de

la “guerra contra la sociedad” (Pécaut, 2001) y la integración en el negocio del narcotráfico, cabe pensar en una relativa atomización de los frentes de la guerrilla, orientados más a una lógica de la “supervivencia”, que únicamente encuentra en la continuación del conflicto su razón de ser. Así se explica la tendencia divergente del ELN y de las FARC en sus métodos de guerra –secuestro, extorsiones, narcotráfico, su interacción y en su relación con los otros grupos armados. Ya se vio que las FARC y el ELN pueden hacerse la guerra en Arauca o, hasta hace poco, en Nariño y actuar conjuntamente en Magdalena Medio o Norte de Santander. Igual sucede con las Bacrim.

Ello se une a una ruptura en los vasos comunicantes y en la contigüidad geográfica que ha conducido a una suerte dispar creciente dentro de los diferentes grupos de la insurgencia, donde los frentes próximos a los escenarios ingentes de cultivo y tráfico ilícito disponen de muchos más recursos y menores motivos para cesar en su protagonismo dentro del conflicto que el resto de frentes. De este modo, ello es fundamental para interpretar el alcance y sentido del actual proceso de negociación.

Dada la reducción de las prácticas de extorsión y secuestro, nuclear en muchos frentes, y fruto de una mayor *periferalización* en lo que concierne al cultivo de coca, lo cierto es que el conflicto ha derivado, en muchos escenarios, a una tésitura de “estancamiento doblemente doloroso” (Harto de Vera, 2004). Tanto para parte de la guerrilla, con mayor dificultad para operar y relegada a regiones más hostiles y con menor disposición de recursos, como para el gobierno, cada vez con mayores dificultades para intervenir y desplegar operativos exitosos en según qué lugares. Quizá esta razón sea clave para entender la política de aproximación que desde la llegada al poder de Juan Manuel Santos (2010), se ha venido producido con la guerrilla.

Sin embargo, pese a todo, Colombia sigue desatendiendo la dimensión estructural de la violencia, esto es, de superación y mitigación de los condicionantes que han sido claves para albergar la violencia en Colombia y que explican, en parte, la dinámica cartográfica del conflicto y la violencia. Mientras ello no tenga lugar, lo cierto es que será difícil pensar en Colombia como un país de paz. Tanto es así, que del actual proceso de paz, a lo sumo, cabe esperar que consiga la desmovilización de aquellos sectores de las FARC, y posiblemente del ELN, más alejados de los escenarios y territorios afectos por el narcotráfico y el crimen organizado, y donde la integración a la vida política se erige como la alternativa transformadora única desde la que mantener influencia en el territorio.

Por tanto, es muy posible que tras un hipotético exitoso proceso de paz, tenga lugar una lógica de la emulación dentro de las guerrillas similar a la acontecida tras la desmovilización de las AUC, cuando, una vez desmovilizadas, se mantuvieron sus estructuras conformadas, sobre todo, con antiguos mandos medios del paramilitarismo que dieron continuidad territorial a las acciones de las AUC sobre aquellos emplazamientos más próximos al cultivo de coca y al control de los corredores estratégicos desde los que dar salida a la misma.

En definitiva, con todo lo expuesto, y de resultar positivo el proceso de negociación, éste llevará consigo, en primer lugar, una desmovilización parcial de las FARC y del ELN, y en segundo lugar, una continuidad de la violencia en aquellos escenarios que han sido descritos en este trabajo. En la narrativa oficial, de suceder ello, ya no habrá FARC ni ELN pero seguirán prácticas violentas y corrosivas con la sociedad que, en todo caso, requieren, para su transformación en territorios de postconflicto primero, y paz después, de una superación de condicionantes estructurales que, hoy por hoy, quedan lejos de estar resueltos.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Acemoglu, Daron; Robinson, James y Santos-Villagrán, Rafael (2009) “The Monopoly of Violence: evidence from Colombia”, *Working Paper*, Harvard University.
- Aponte, David y Vargas, Andrés (2012) *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN*, Bogotá, Odecofi-Cinep.
- Bechara, Eduardo (2012) *¿Prolongación sin solución?*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
- Benito, Miguel (2007) *La estrategia de Seguridad y Defensa de Estados Unidos antes y después del 11 de Septiembre: una perspectiva a través del neo-conservadurismo*, Madrid, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
- Briscoe, Ivan (2007) “Crimen y droga en los Estados frágiles”. [En línea]. FRIDE, 20 de julio de 2007. <<http://www.fride.org/publicacion/151/crimen-y-drogas-en-los-estados-frágiles>>. [22 de agosto de 2013].
- Chernick, Marc (2012) *Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano*, Bogotá, Aurora.
- CINEP (2012) *Conflicto armado en Colombia durante 2011*, Bogotá, CINEP-Programa por la Paz.
- CODHES (2011) “De la seguridad a la prosperidad democrática en medio del conflicto”, *Documentos CODHES*, núm. 23, Bogotá, CODHES.
- De los Ríos, Edwin (2011) “La región de Montes de María. Escenario actual de riesgo y violación de los Derechos en Colombia”, en *III Seminario Internacional de Derechos hacia una Cultura de Paz*, 10-11 de mayo de 2011, Círculo de Bellas Artes, Madrid.
- Duncan, Gustavo (2007) *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*, Bogotá, Planeta.
- Echandía, Camilo (2006) *Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
- Espejo, Germán y Garzón, Juan Carlos (2005) “La encrucijada del ELN”, en *Fundación Seguridad y Democracia*, 27 de julio de 2005, Colombia.
- Esty, Daniel *et al.* (1998) “*State Failure Task Force Report: Phase II Findings*”. [En línea]. Environmental Change and Security Project Report, Issue 5, verano de 1999. <<http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Phase2.pdf>>. [29 de agosto de 2013]
- Fals Borda, Orlando; Guzmán German y Umaña, Eduardo (2005) *La violencia en Colombia*, Bogotá, Taurus.
- Federación Nacional de Departamentos (2013) “Fronteras, Paz y Desarrollo”, en *LVIII Cumbre de Gobernadores*, 18 de febrero de 2013, San Andrés, Colombia.
- Fernández de Soto, Guillermo (2004) *La ilusión posible. Un testimonio sobre la política exterior colombiana*, Bogotá, Norma.
- Galtung, Johann (1964) “An editorial”, en *Journal of Peace Research*, vol. 1, núm.1, pp. 1-4.
- Galtung, Johann (1969) “Violence, peace and peace research”, en *Journal of Peace Research*, vol. 6, núm.3, pp. 167-191.
- Galtung, Johann (1996) *Peace by peaceful means: Peace and Conflict*, Londres, Sage.
- González, Fernán *et al.* (2011) *Conflicto y territorio en el Oriente colombiano*, Bogotá, Odecofi-Cinep.

- González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo (2003) *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Bogotá, Cinep.
- Harto de Vera, Fernando (2004) *Investigación para la paz y resolución de conflictos*, Valencia, Tirant Lo Blanch.
- Koonings, Kees y Krujit, Dirk (2004) *Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America*, Londres-Nueva York, Reino Unido-Estados Unidos, Zed Books.
- Medina, Carlos (2011) *FARC-EP. Flujos y reflujos*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2011) *Logros de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad*, Bogotá.
- Ministerio de Defensa Nacional de Colombia (2011b) *Gasto en Defensa y Seguridad 1998-2011*, Bogotá.
- Patiño, Carlos (2010) *Guerra y construcción del Estado en Colombia 1810-2010. De la improvisación a la institucionalización*, Bogotá, Random House Mondadori.
- Pécaut, Daniel (1997) “Presente, pasado y futuro de la violencia”, en *Análisis Político*, núm. 30, pp. 3-70.
- Pécaut, Daniel (1997b) “De la violencia banalizada al terror”, en *Controversia*, núm. 171, pp. 9-32.
- Pécaut, Daniel (1999) “Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto de terror: el caso colombiano”, en *Revista Colombiana de Antropología*, núm. 35, pp. 8-35.
- Pécaut, Daniel (2000) “Entre pragmatisme et violence. Les stratégies des mafias colombiennes de la drogue”, en *Politix, Revue des Sciences Sociales du Politique*, vol. 13, núm. 49, pp. 77-96.
- Pécaut, Daniel (2001) *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Espasa.
- Pécaut, Daniel (2008) *Las FARC, ¿una guerrilla sin fin o son fines?*, Bogotá, Norma.
- Pécaut, Daniel (2011) *Orden y violencia. Colombia: 1930-1954*, Medellín, EAFIT.
- Pizarro, Eduardo y Bejarano, Ana María (2003) “Colombia, ¿hacia un Estado fracasado?”, *ReVista-Harvard Review of Latin America*. [En línea]. Harvard University, primavera de 2003.
< http://www.drclas.harvard.edu/revista/articles/view_spanish/235>. [22 de agosto de 2013].
- Pizarro, Eduardo (2011) *Las Farc (1949-2011). De guerrilla campesina a máquina de guerra*, Bogotá, Norma.
- Presidencia de la República de Colombia (2010) *Informe al Congreso de la República, 2010*, Bogotá.
- Rice, Susan (2002) “U.S Foreign Assistance and Failed States”. [En línea]. The Brookings Institution, 25 de noviembre de 2002. <http://www.brookings.edu/papers/2002/1125poverty_rice.aspx>. [22 de agosto de 2013].
- Ríos, Jerónimo, et al. (2013). “Estado, Estado de Derecho y Violencia Armada en Colombia (2000-2011)”, en *Revista de Paz y Conflictos*, vol.6, pp. 6-32.
- Reyes, Alejandro (2008) *Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia*, Bogotá, Norma.
- Rotberg, Robert (2004) *When States Fail: Causes and Consequences*, Princeton, Princeton University Press.

- Salcedo, Diana María (2013) “Género, derecho de las víctimas y justicia transicional”, en *Revista de Paz y Conflictos*, vol.6, pp. 124-151.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2011) *Global Study on Homicide. Trends, Context and Data*, Viena.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012) *World Drugs Report 2012*, Viena.
- Valencia, León (2002) *Adiós a la política, bienvenida la guerra. Secretos de un malogrado proceso de paz*, Bogotá, Intermedio.
- Wallensteen, Peter (2000) “Beyond State Failure: On Internal and External Ways of Ending State Failure”. [En línea]. III Encuentro sobre Estados Fallidos, Universidad de Florencia, abril de 2000. <http://www.comm.ucsb.edu/faculty/mstohl/failed_states/2000/papers/wallensteen.html>. [7 de septiembre de 2013].

NOTAS

ⁱ Trabajo preparado para su presentación en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Bogotá, 25 al 27 de septiembre de 2013.

ⁱⁱ Jerónimo Ríos Sierra es Docente de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás (Colombia). Asimismo, es Investigador Doctorando en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

ⁱⁱⁱ De acuerdo con el posicionamiento que, entre otros, plantean académicos como Carlos Medina Gallego o Germán Bula Escobar, la “Diplomacia para la Paz” es un relativo fracaso o un relativo éxito en la medida en que, a partir de entonces, la correlación de fuerzas cambia drásticamente a favor del Estado y dejan de sucederse las derrotas militares del ejército por parte de la guerrilla.

^{iv} Las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC es la organización que concentra el paramilitarismo a partir de 1997 y que surge de las conocidas como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) dirigidas en la década de los noventa por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

^v Véase la evolución de los siguientes indicadores a lo largo de la última década para dar cuenta de cómo se ha percibido el fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia dentro de la tésitura de la violencia armada: The Fund for Peace, Failed States Index, http://www.fundforpeace.org/global/Foreign_Policy_Failed_States_Index, <http://www.foreignpolicy.com/failedstates>, http://www.foreignpolicy.com/Carleton_Country_Indicators_for_Foreign_Policy, <http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1148.pdf> Brookings, Índice de la debilidad del Estado en el mundo en desarrollo, www.brookings.edu/reports/2008/02_weak_states_index.aspx

^{vi} Cuando en el texto aparece PSD, lo hace de acuerdo con la denominación común que comprende todo el programa de políticas públicas orientadas a la seguridad y superación del conflicto durante los años de gobierno de Álvaro Uribe y que transcurren entre 2003 y 2010.

^{vii} Véase: <http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/693-la-polca-de-seguridad-democrca.html>

^{viii} Véase: <http://www.semana.com/portada/articulo/si-guerra-senor-presidente/70763-3>

^{ix} El promedio en 2002 era de 702 efectivos por cada 100.000 habitantes.

^x Es importante precisar que en su origen, el Plan Colombia aprobado por Bill Clinton y Andrés Pastrana en 1999, en su objetivo por desactivar el conflicto armado planteado por la guerrilla, contaba con elementos más allá de la seguridad. Sin embargo, la victoria electoral de Uribe y de Bush, así como el cambio geopolítico que acontece a partir del 11 de Septiembre de 2001, favorecieron un punto de encuentro muy diferente. Tanto es así que Uribe, intentó renombrar el Plan Colombia como “Plan Patriota” a fin de subrayar su orientación claramente guerrillista y alejado de todo atisbo de negociación.

^{xi} Las FARC se organizan en frentes a partir de 1968 y a partir de 1993, cuando se supera la treintena de frentes se opta por hacer uso de los bloques, cada uno, dirigido por un miembro del Secretariado. Los bloques son 5 y a ellos se suman dos comandos conjuntos. Hasta 2008, la estructura de los bloques era la siguiente: Bloque Oriental (Mono Jojoy), Bloque Sur (Raúl Reyes), Bloque Occidental (Alfonso Cano), Comando Conjunto de la Región Central (Alfonso Cano), Bloque Magdalena Medio (Timoleón Jiménez), Bloque Noroccidental (Iván Ríos) y Bloque Caribe (Iván Marquez). Cada bloque cuenta con al menos 5 frentes así como con varias columnas móviles. Cada frente y cada bloque tienen su Estado Mayor y todo queda coordinado por el Estado Mayor Central. Las unidades guerrilleras son la escuadra (12 guerrilleros), la guerrilla (24), la compañía (54), la columna (110) y el frente (200 aprox.). Pécaut (2008, p. 107).

^{xii} Véase: cerac.org.co/assets/files/DatosPaginaWeb.xlsx

^{xiii} La parapolítica es la cooptación del poder local y regional, pero también de las altas esferas del Estado por parte del narcotráfico y el paramilitarismo. Desde que se destapara el escándalo en 2006, hasta el momento ha provocado la investigación de 500 funcionarios del Estado y 199 congresistas, de los cuales 40 ya han sido condenados.

^{xiv} Solo entre 1997 y 2010 se registraron 163.357 desplazamientos forzados en la región.

^{xv} Como reconoce Salcedo (2013, p. 128), la Ley de Justicia y Paz fue el medio por el cual se favoreció la desmovilización paramilitar. Sin embargo, “hay que señalar que a este proceso se le critican, entre otras, la poca capacidad institucional para juzgar y sancionar a los victimarios, la falta de garantías para las víctimas, la reconfiguración de los actores armados ilegales, la larga espera para la reparación de las víctimas, la poca verdad conocida en las audiencias y la continuidad de la confrontación armada” como algunas de las implicaciones más notables que se vislumbran transcurrida la primera media década desde que se aprobara la Ley.